



# OBSERVATORIO LABORAL DE LAS AMÉRICAS



## Ficha país:

**C** **o** **S** **t** **a** **R** **i** **c** **A**

**Año 2022**

## Panorama demográfico, socioeconómico y laboral



**Extensión territorial:**  
51.179 km<sup>2</sup>



**Población (censo 2011)<sup>1</sup>:**

4.301.712

**Población estimada**

**2022:**

5.213.362 personas.



**Composición de la población (censo 2011):** 49% hombres (2'106.063); 51% mujeres (2'195.649).

Por autoidentificación étnica, el 83,6% de la población es blanca o mestiza; el 6,7% mulata; el 2,4% indígena; el 1% negra o afrodescendiente; el 0,2% china; y el 5,9% de otra etnia o sin declarar.

**Producto Interno Bruto (PIB) 2021:** 64.423 millones de dólares<sup>2</sup>

**PIB 2022:**

el Banco Central de Costa Rica proyecta un crecimiento de 4,3% al finalizar el año.



**Población Económicamente Activa (agosto 2022):** 2.484.855 personas.

<sup>1</sup>La información contenida en esta sección ha sido generada a partir de los registros más recientes obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC).

<sup>2</sup> <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/perfil-nacional.html?theme=2&country=cri&lang=es>



**Empleo (tercer trimestre 2022):** la tasa de ocupación fue de 53,3% (2.187.884 personas); 1.352.739 hombres (61,8%) y 835.145 mujeres (38,2%).



**Desempleo (tercer trimestre de 2022):** la tasa de desempleo fue de 12% (296.971 personas); 131.477 hombres (44,3%) y 65.494 mujeres (55,7%).



**Informalidad (tercer trimestre 2022):** 42,5% de la población ocupada (930.797 personas); 555.694 hombres (59,7%) y 375.103 mujeres (40,3%).



**Población Inactiva (tercer trimestre 2022):** 1.622.762 personas; 574.126 hombres (35,4%) y 1.048.63 mujeres (64,6%).



**Pobreza:** a julio de 2022 el 25,5% de la población era pobre (1.329.757 personas) y de estas el 7,6% vivía en pobreza extrema (393.385 personas).

### Temas destacados de la coyuntura 2022

En abril se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial Rodrigo Chaves, del partido de derecha Progreso Social Democrático, fue electo como mandatario. Los resultados desataron polémica pues Chaves fue denunciado y sancionado por acosar a dos de sus empleadas en el Banco Mundial entre el 2008 y 2013; en su momento, el electo presidente se defendió diciendo que se trataba de simples bromas que fueron malinterpretadas por diferencias culturales.

La presidencia de Chaves lidera una política económica de recortes al gasto público y la profundización de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En sus primeros 100 días de gobierno presentó el proyecto de ley que quiere privatizar el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una de las empresas bancarias más sólidas del país y de la

región centroamericana, bajo el argumento de que su venta ayuda a pagar la deuda externa. Sectores que se oponen a la propuesta señalan que, aunque las cifras de ganancia que presenta el oficialismo sean verdaderas, la venta del banco solo representaría una proporción muy pequeña del monto global de la deuda pública, que se estima que asciende al 70% del PIB, por lo que consideran que la medida no es favorable y que más bien responde a mecanismos de privatización del Estado.

Otra de las medidas que ha causado polémica es la exigencia del oficialismo para la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de emisión de títulos de deuda con el FMI. La iniciativa presentada por el gobierno propone dos emisiones por 6 mil millones de dólares en títulos de deuda o eurobonos y una solicitud adicional de 2 mil millones en créditos; de ser aprobados, aumentaría la deuda del país en 14 mil millones de dólares.

El presidente Rodrigo Chaves alertó que, de no ser aprobada la solicitud en el parlamento, Costa

Rica caería en crisis económica y democrática. La discusión aún se encuentra vigente en el parlamento y algunas de las prevenciones para su aprobación se relacionan con la incertidumbre que causa el desplome de los eurobonos que día a día se desvalorizan en el mercado internacional, lo que implicaría una deuda más cara al momento de su pago.

En sus intervenciones presidenciales, Chaves ha manifestado abiertamente que las soluciones económicas del país son reducir el gasto público (aunque aumentó el salario de 60 ministros y viceministros de su confianza), recortar el presupuesto del Fondo Especial a la Educación Superior (FEES), vender empresas públicas, entre otras medidas de privatización.

### **Acciones sindicales y de otros sectores sociales**

El movimiento sindical en Costa Rica denunció la ofensiva ideológica y política en contra del Instituto Nacional de Seguros

(INS) por parte de distintos grupos financieros. En el marco de la acción relacionada con la dimensión social del sindicalismo, distintas voces desde las/os trabajadoras/es han reclamado la necesidad de mantener al INS como propiedad pública estatal, al ser una institución estratégica para la sobrevivencia y la **seguridad social** de la población trabajadora asalariada que ha sido empobrecida durante los últimos gobiernos. Las denuncias se han presentado ante la propuesta presidencial de privatizar el 49% de la entidad; en un primer momento presidencia señaló que el dinero obtenido con la privatización se destinaría al pago de la deuda pública y en una segunda ocasión afirmó que sería para la construcción de infraestructura vial. El movimiento ha llamado a todas las organizaciones sociales a prepararse articuladamente para enfrentar, desde la movilización pacífica y legítima, la venta de activos públicos.

Más de 400 organizaciones sociales hicieron una petición al gobierno para dejar de desacreditar la Caja Costarricense del Seguro

Social (CCSS), al considerarla una estrategia de privatización: hacer creer que la entidad pública se encuentra quebrada da argumentos para venderla a bajo precio. Por otra parte, las universidades públicas del país convocaron a una movilización masiva en el mes de agosto, tras el anuncio del gobierno de realizar un recorte de 129 mil millones al presupuesto de educación superior. Tras las marchas, el gobierno se vio obligado a desistir de reducir el presupuesto del FEES y se comprometió a discutir un aumento en el presupuesto como reajuste por la inflación.

En la misma línea de denuncia, el sindicalismo costarricense alertó sobre las intenciones de vender el Banco de Costa Rica (BCR), lo que consideran un nuevo intento de negociación con el FMI. El movimiento de las/os trabajadoras/es ha manifestado su posición en contra de cualquier proyecto de venta total o parcial de instituciones del Estado. Adicionalmente se repudió la intención del presidente Rodrigo Chávez de poner en duda la honestidad de las/os empleadas/os

del Banco, a través de declaraciones que señalan que en el BCR existe corrupción e ingobernabilidad. Aunque el gobierno ha negado la posibilidad de despidos a raíz de la venta, las/os trabajadoras/es aseguran que esta manifestación de buenas intenciones no asegura que la nueva empresa dueña del Banco no prescindiera del personal que trabaja allí en la actualidad, utilizando los mecanismos legales estatales para el despido de trabajadoras/es.

En la dimensión ambiental y las luchas por la defensa del **agua**, el sindicalismo y los movimientos ambientalistas denunciaron la contaminación de Nueva Asada, en Cartago, por plaguicida clorotalonil. Incluso el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han generado órdenes de alerta sanitaria para que los vecinos de la zona no utilicen el agua para el consumo humano, preparación de alimentos o actividades de higiene.

Organizaciones ambientalistas en articulación con el movimiento de las/os trabajadoras/es denunciaron

la afectación que por varios años ha vivido la población de Cipreses de Oreamuno, Cartago, debido a la contaminación de las fuentes hídricas con dicho plaguicida, e hicieron un llamado al gobierno de la República, a los Consejos Municipales y a la Unión de Gobiernos Locales para que se prohíba el uso de clorotalonil en Costa Rica.

Los sindicatos rechazaron la eliminación del impuesto a la palma aceitera, que se contempla desde la Asamblea Legislativa a través del proyecto de Ley No 22408 denominado *Ley de apoyo a los productores de Palma Aceitera del Cantón de Corredores*, al considerar que se verían afectadas drásticamente las arcas municipales y los proyectos sociales y económicos que de desarrollan a partir del dinero recaudado con ese impuesto. Según la información presupuestaria del Municipio de Corredores, en los últimos años con el impuesto se han recaudado 1.395 millones de colones, de ellos 139,5 millones han regresado a los contribuyentes de ese impuesto a través del Centro Agrícola

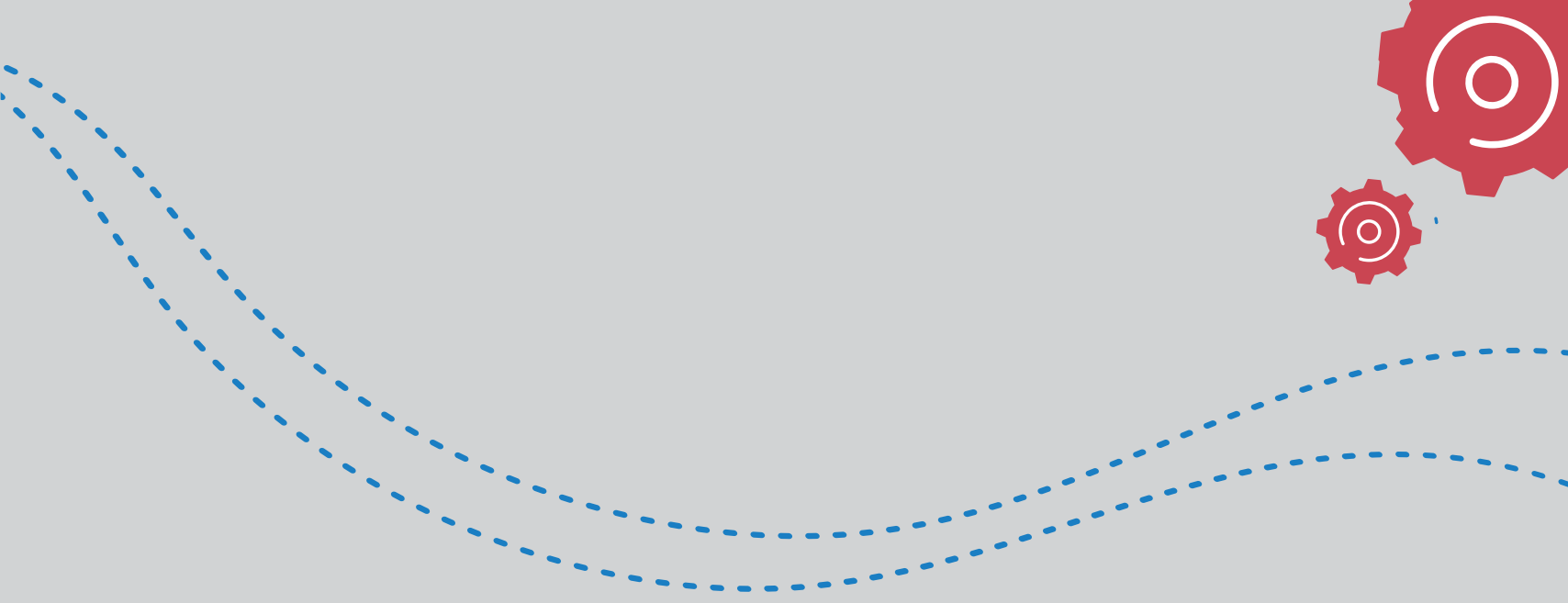
Cantonal, y por becas a hijas/os de las/os mismas/os palmeros/as. Una eliminación del impuesto conllevaría despidos de hasta 50% del personal municipal al no poder pagarse las cargas sociales y los salarios; no se podría hacer frente a obligaciones financieras previamente contraídas con créditos bancarios para la realización de obras públicas; desmejora del servicio público; afectación a la población de estudiantes becados; afectación a las finanzas del Centro Agrícola Cantonal, entre otras consecuencias negativas.

Ante la aprobación de la Ley de Empleo Público por parte del gobierno anterior, los sindicatos manifestaron su total rechazo por considerarla precarizadora, antidemocrática y arbitraria para las relaciones laborales. Asimismo, frente a la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves de aumentar la jornada laboral a 12 horas, los sindicatos han denunciado la imposición de una política antiobrera y la legalización de la precarización laboral, amenazas graves contra las condiciones de la clase trabajadora en su conjunto.

Por eso, el movimiento sindical en las dimensiones laboral y económica de su accionar ha realizado una serie de propuestas sobre **políticas y promoción de empleo** a ser discutidas con el ejecutivo, entre las que se encuentran una jornada de seis horas sin reducciones salariales, un aumento salarial acorde con el precio de la canasta básica, evitar los recortes al gasto público, evitar la precarización y el aumento de la informalidad, y contratos de trabajo colectivos y plaza permanente.

También el movimiento de las/os trabajadoras/es considera la necesidad de articular junto a otros sectores sociales una campaña contra posibles préstamos con el FMI y contra la renegociación de la deuda, por la auditoría de la deuda externa, y usar los recursos públicos para enfrentar las consecuencias de la crisis económica y atender las necesidades más acuciantes de la mayoría de la población, y para el otorgamiento de créditos baratos a las pequeñas y medianas empresas.





# Apoya

